

PRESENTACIÓN

La formación profesional y la capacitación han sido escenario, en América Latina y el Caribe, de importantes transformaciones e innovaciones en los últimos años. A la par que se produce un incremento y diversificación de los actores que – directa o indirectamente- intervienen en este campo, se ha visto afectada la clásica institucionalidad de la formación, su organización y modalidades de gestión y financiamiento. Las innovaciones alcanzan también a los enfoques metodológicos y hasta la propia concepción de la formación, fundamentalmente en lo que refiere a sus dimensiones laboral, tecnológica y educativa.

Los programas de capacitación y empleo orientados a los jóvenes constituyen, a este respecto, una de las manifestaciones más claras y evidentes de los cambios a que se hace referencia. A partir de la experiencia pionera del Programa Chile Joven, y la posterior implementación de proyectos o programas análogos en otros países de la región, emerge un enfoque de la política pública de formación que posee visibles diferencias y aspectos novedosos respecto de las políticas aplicadas en el pasado.

En Uruguay, el proyecto piloto Opción Joven (1994-1997) y el Programa Projoven (vigente en la actualidad y continuación del anterior), aparecen entonces como ilustraciones nacionales de un enfoque que ha adquirido gran difusión en la región americana, y que podría caracterizarse sucintamente de la siguiente manera:

- Basan su actuación en un criterio de focalización de las acciones de política pública, utilizando instrumentos específicos para sectores o grupos también específicos, con lo cual los aspectos de delimitación de la población beneficiaria y de selección de participantes adquieren gran relevancia en los diseños.
- Parten de la base doctrinal de que debe prepararse a la población para su inserción en el mercado, antes que protegerla de las fluctuaciones del mismo.
- Buscan una combinación de esfuerzos públicos y privados que permitan actuar tanto sobre la oferta laboral como sobre la demanda de empleo.
- Parten de una mayor atención a la demanda de formación, por contraposición al tradicional esquema centrado en la oferta.
- Importan un cambio en los enfoques de las políticas sociales que conlleva una transformación en el rol del Estado, y en particular, de los Ministerios de Tra-

bajo. Estos se centran en el diseño de políticas y estrategias, financiamiento, supervisión y evaluación de las acciones de capacitación. La ejecución de dichas acciones se delega en otros agentes, tanto públicos como privados, con lo que se observa un proceso de creciente diversificación y descentralización de la oferta de formación.

- Apuntan a favorecer la inserción laboral de jóvenes provenientes de hogares de bajos ingresos. En general, estos son identificados como un sector de la población –y de los jóvenes– aquejado por un conjunto de factores negativos que atentan contra sus posibilidades en el campo laboral, reforzando la reproducción de su condición social: deserción temprana del sistema educativo formal, desatención de los sistemas de educación técnica y formación profesional regulares hacia los mismos, baja calidad de la enseñanza a nivel de los establecimientos a que acceden, inadecuación de la educación proporcionada por el sistema formal a las demandas del mercado laboral.

Estas y otras características de tales programas son abordadas en el presente trabajo, pero centrando la atención en otro aspecto relevante y característico de ellos y que reside en la actual discusión sobre la importancia de realizar **evaluaciones de impacto y resultados** de este tipo de programas. Ello ha creado un entorno de reflexión sobre las ventajas que reportaría la incorporación de un componente de evaluación en el propio diseño del programa, como un insumo estratégico para la toma de decisiones y reorientación durante las fases de planificación, implementación y seguimiento de las actividades de capacitación. Las evaluaciones se convierten entonces en instrumentos que permiten ir siguiendo objetivamente el impacto que las políticas y programas tienen sobre los sectores sociales que han sido identificados como vulnerables, en este caso los jóvenes. Gracias a la información que se obtiene a través de ellas es posible ir ajustando la ruta trazada para la ejecución de dichas políticas sociales.

En el entendido que las cuestiones que aparecen en el presente trabajo de Alicia Naranjo poseen relevancia tanto para un balance adecuado de los programas de capacitación y empleo de jóvenes como los aquí considerados para el caso uruguayo, como para una discusión más amplia acerca de las políticas públicas de formación en sus aspectos institucionales, de gestión, financiamiento y enfoque metodológico, la Oficina del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Uruguay y Cinterfor/OIT, han combinado esfuerzos y recursos para hacer posible su realización y publicación.

Martín Santiago

Coordinador Residente de las Naciones Unidas
y Representante Residente del PNUD
en el Uruguay

Pedro Daniel Weinberg

Director del Centro Interamericano de Investigación
y Documentación sobre Formación Profesional
Cinterfor/OIT